

El lugar de Pinochet en la historia.

Una interpretación política de la experiencia autoritaria. 1973 - 1990

Cristián Gazmuri*

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile tuvo como propósito, según se expresó públicamente, "restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada". El propio Pinochet afirmó el día 16 de septiembre "Chile volverá a su tradicional sistema democrático". No se mencionó entonces la intención de imponer un proyecto que cambiara fundamentalmente las estructuras socio económicas del país.

Estas primeras declaraciones apuntaban a la idea de un gobierno corto que dejaría el mando en cuanto se dieran las condiciones para retornar al orden constitucional tradicional. Fue así que, frente a la aparente imposibilidad de una salida institucional a la crisis que aquejaba al país desde fines de 1972, muchos chilenos -incluso quizá la mayoría de los simpatizantes del Partido Demócrata Cristiano- miraron con alivio, aunque sin simpatía, lo sucedido. Reforzaba su confianza en un pronto retorno democrático el hecho de que en Chile los militares no tenían una tradición golpista y habían gobernado dictatorialmente sólo una vez durante el Chile republicano. Otros, observando la radicalización política existente y la dureza de la acción militar represora, pensaron desde un principio en el advenimiento de una dictadura larga. Tenían razón. En octubre de ese año, el discurso de los militares, que al momento del golpe no parecen haber tenido plan de gobierno alguno, ya había cambiado. No se trataba ahora de restaurar el sistema democrático tradicional, sino que éste comenzó a ser considerado como la causa misma de la crisis.

¿Por qué esta evolución? Parece claro que para algunos sectores de militares el discurso inicial no fue más que una táctica. Sin embargo, no todos los militares pensaban de ese modo y existieron otras circunstancias que permiten comprender mejor la enunciada evolución.

En primer lugar, la forma como se dio el golpe marcó un estilo, fue un acto de guerra. No hubiera sido fácil volver rápidamente a un orden democrático en esas condiciones. ¿A que se debió ésta actitud extremadamente violenta en circunstancias que la resistencia fue muy poca? El duro entrenamiento de las Fuerzas Armadas fue en parte responsable, combinado con la intención de inhibir cualquier intento de resistencia armada seria, algo que la propia izquierda había proclamado y parecía en condiciones de ofrecer. También fue importante la ideología de la "seguridad nacional", auspiciada por el gobierno de Estados Unidos y considerada entonces por los círculos castrenses del continente como único bastión doctrinario confiable en la lucha contra el marxismo. Era preciso salvar el "alma nacional", el conjunto de valores que constituían el ser de Chile. Esta misión requería tiempo, todo el que fuese necesario.

Hay que tener en cuenta además la cultura y estatus social de los militares chilenos. Su cultura, de tradición prusiana en el Ejército y británica en la Armada, era la de jerarquía y orden, todo lo contrario de lo que había mostrado el Chile de la última década. Además, reclutadas entre la clase media, las Fuerzas Armadas chilenas tenían un fuerte resentimiento contra el mundo de la élite civil y política en especial, la que por décadas había mantenido hacia ellas y sus valores una actitud desinteresada. La revancha contra los políticos, a los que se reprochaba, no sin razón, el haber contribuido a precipitar la crisis, se transformó en un ataque contra el sistema democrático mismo.

Las actitudes de la derecha chilena y el centro demócratacristiano también incidieron en la consolidación autoritaria.

La derecha tradicional había visto sus ideas e intereses cuestionados y perjudicados durante los gobiernos de los Presidentes Frei y Allende, hasta el punto de temer sobre su existencia como clase y eso no lo perdonaba. Ahora quería terminar definitivamente con los proyectos igualizantes que la habían amenazado y, consecuentemente, apoyaban la idea de una dictadura militar larga. La Democracia Cristiana en tanto, con la que algunos militares habían simpatizado hasta el gobierno de Frei, aparecía a sus ojos como utilizándolos. Induciéndolos primero al golpe de Estado y luego retirándoles su apoyo para quedarse finalmente con el poder. La simpleza del raciocinio, ampliamente difundido por lo asesores civiles de derecha, no le quitaba fuerza.

Pero la nueva orientación que caracterizó al segundo momento del gobierno militar obedeció, fundamentalmente, a que tomaron importancia dentro de éste, grupos de derecha renovada. Esta estaba representada principalmente por el "Gremialismo" y los llamados "Chicago Boys".

El "Gremialismo", originalmente fue un grupo de jóvenes de derecha formados en la Universidad Católica de Chile (UC) y dirigidos por el entonces estudiante Jaime Guzmán, un conservador devoto y crítico de la democracia liberal. Bajo el discurso del apoliticismo, sostuvieron en un comienzo ideas próximas al franquismo de la primera época, para ir derivando, después de 1973, hacia la idea de una "democracia protegida". Serían el núcleo político pensante del régimen militar y estarían tras la Constitución de 1980. El segundo grupo de derecha que terminó de consolidarse durante el gobierno de la Unidad Popular, aunque ya existía previamente, fue un núcleo de economistas, el de los llamados "Chicago Boys". También nacido entre alumnos de la Universidad Católica, en este caso en la Escuela de Economía, durante la década de 1960 hicieron post grados en la Universidad de Chicago, pasando luego a ocupar cargos como docentes en el Instituto de Economía de la UC y a asesorar a grandes empresas en algunos casos. Los Chicago Boys serían quienes aportarían el modelo económico neoliberal al gobierno de Pinochet.

En síntesis, el proyecto histórico de esta nueva derecha se fundaba, en la combinación de un semiautoritarismo político, una economía liberal, una sociedad jerarquizada y una cultura conservadora.

Resulta natural que esta derecha renovada se alineara con los militares desde el primer momento; se necesitaban mutuamente: los militares pondrían la autoridad y el orden, los políticos y técnicos de derecha el proyecto histórico.

El viraje que transformó el gobierno militar de ser una instancia transitoria a una de carácter fundacional en torno a la figura de Augusto Pinochet, tuvo su consagración jurídica el 4 de diciembre de 1974 cuando el Decreto-Ley N° 788 confirió a la Junta de Gobierno la potestad de modificar a su arbitrio y retroactivamente la carta fundamental de 1925. Pero ya antes Pinochet había logrado convertirse en el hombre fuerte alrededor del cual giraría la nueva institucionalidad. El 26 de junio de 1974 (Decreto-Ley N° 527), Pinochet pasaba a ser cabeza del Ejecutivo con el título de Jefe Supremo de la Nación. En diciembre del mismo año se cambiaría la denominación de su cargo por la tradicional de Presidente de la República. Por su parte, la Junta de Gobierno asumiría las funciones de Poder Legislativo y Constituyente. Pinochet gobernaría por casi una década sin oposición popular importante. Esto fue resultado de una combinación entre dura represión política, éxito económico, apoyo político de la derecha y su capacidad de mantener el control de las Fuerzas Armadas.

EL PROYECTO

La nueva línea adoptada por el régimen militar se manifestó en la fijación de metas sin plazos. Esta había quedado esbozada en lo doctrinario ya el 11 de marzo de 1974, cuando el general Pinochet leyó ante el país dos documentos: la "Declaración de Principios" que echaba las bases de una nueva institucionalidad y el "Objetivo Nacional" que delineaba un plan económico.

El primer documento afirmaba el principio de autoridad como fundamento de las sociedades política y civil. Las medidas de excepción tomadas durante los primeros días fueron perpetuadas mediante una legislación consecuente. En lo fundamental: suspensión de la institucionalidad política consagrada en la Constitución de 1925, intervención y control de la prensa y las universidades, estado de sitio, toque de queda, persecución de los funcionarios del régimen de la Unidad Popular, prohibición de cualquier manifestación social, prohibición de la actividad sindical, mantención del exilio.

El segundo documento apuntaba hacia el modelo liberal auspiciado por los economistas del grupo de los "Chicago Boys". Estos, apoyados por la Armada de Chile, tuvieron poder dentro del régimen desde el momento del golpe de Estado, pero no ingresarían al gabinete ministerial hasta julio de 1974 con Jorge Cauas. El control del grupo sobre el aparato económico se hizo absoluto el año siguiente, cuando su figura más representativa, Sergio De Castro, fue nombrado Ministro de Economía. En diciembre de 1976, De Castro reemplazaría a Cauas en Hacienda, el ministerio clave del sector económico.

Los "Gremialistas", entre los cuales se reclutó la segunda generación de "Chicago Boys", liderada por Miguel Kast, terminando con sus vagas aspiraciones económicas corporativistas, pasaron a apoyar firmemente el ordenamiento liberal, ayudando a imponerlo como proyecto económico oficial después de 1975. Ese año los "Chicago Boys" impusieron una política

de shock destinada a la reconversión privatizadora de la economía chilena. Convencidos de que su carácter progresivamente estatizante, que se arrastraba desde la crisis mundial de 1929, era la causa estructural de sus crisis recurrentes y su incapacidad para enfrentar el desarrollo que demandaba el país, decidieron alterarla drásticamente.

El tiempo transcurrido ha mostrado que el diagnóstico de los "Chicago Boys" era el elemento teórico más serio del proyecto histórico que se estaba configurando y sería en definitiva, en la forma de la economía liberal que se ha consolidado después de la transición a la democracia, la gran herencia del régimen militar.

Se imponía así un modelo transitorio de liberalismo económico y autoritarismo político. Esta era una combinación que fue presentada como necesaria, insistiéndose que sin el autoritarismo militar el experimento neoliberal –que significaba una verdadera revolución– no hubiera podido llevarse a cabo.

En la nueva configuración que tomaba el régimen, aunque los militares seguían teniendo un rol muy importante serían los asesores y tecnócratas civiles quienes realmente gobernarían, entregando las directrices de largo plazo. El elemento militar serviría a Pinochet para mantener el "control de la situación contingente" y su presencia en cargos públicos conseguía, al mismo tiempo, que los militares siguieran fieles al que consideraban "su" gobierno. La implementación de la relación gobierno-Fuerzas Armadas fue uno de los mayores rasgos de habilidad de Pinochet. Su régimen fue un autoritarismo basado en una alianza militar-tecnocrática.

La combinación se ha justificado aduciendo que en el corto tiempo el modelo neoliberal exigía un "costo social" muy alto. Para controlar a los sectores afectados, se contaba con los mecanismos del autoritarismo. En primer lugar, control de la información y censura a los medios de comunicación. Pero el instrumento fundamental para mantener el control social y político del país durante esos primeros años, fue la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). La DINA fue una policía secreta con facultades casi ilimitadas. Dirigida por el entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda, inició sus acciones en diciembre de 1973; pero se creó formalmente por el decreto-ley N° 217, que contenía disposiciones secretas donde se establecían algunas de sus atribuciones, el cual fue firmado por los cuatro integrantes de la Junta Militar de Gobierno en junio de 1974. Su acción se orientó a detectar, detener sin juicio y, en algunos casos, eliminar, tanto dentro como fuera de Chile, a los enemigos del gobierno militar y extender un severo control sobre la vida de los chilenos. La actitud por lo general obsecuente del Poder Judicial chileno ante el régimen facilitó considerablemente la acción de la DINA.

LA OPOSICION

El golpe de estado fue recibido con estupor y rechazo por la sociedad internacional. Existía una imagen idealizada de la Unidad Popular y el Presidente Allende. El "modelo chileno" representaba la esperanza del advenimiento del socialismo por vía pacífica. Por otra parte, la dureza del golpe y la posterior dictadura en un país que parecía un ejemplo de democracia tercermundista provocaron la protesta mundial. Las sociedades democráticas occidentales fueron tan críticas frente a lo ocurrido como los socialismos reales.

En el interior del país, después de unos tres o cuatro días en que hubo focos de resistencia armada aislados, las fuerzas paramilitares de la ex Unidad Popular se desintegraron y varios miles de dirigentes y simples partidarios fueron tomados prisioneros, huyeron del país o se refugiaron en embajadas (alrededor de 9.000). El total de exiliados políticos fue, probablemente, de unos 30.000.

Sólo el MIR continuó ofreciendo resistencia militar después de las dos primeras semanas. Era un grupo pequeño pero organizado para la clandestinidad, que fue perseguido por la DINA y los servicios de inteligencia de la Fuerzas Armadas. El golpe de gracia se le dió en octubre de 1974, cuando su directiva fue eliminada en el ataque a su sede clandestina. En febrero de 1975 el MIR prácticamente había dejado de existir como fuerza operativa, aunque años después se reorganizaría precariamente. Hacia fines de 1975 -estando semi disuelto el Partido Socialista- la DINA y demás organismos represivos del régimen, se preocuparon del Partido Comunista, siendo eliminados sucesivamente dos de sus comités centrales durante el año 1976. Las acciones de la DINA culminarían en septiembre de 1976 con el asesinato del ex canciller del gobierno de la Unidad Popular, Orlando Letelier, en Washington.

El Partido Demócrata Cristiano, después de unos meses de observación e incluso una cierta colaboración de hecho con el nuevo gobierno por parte de algunos de sus militantes, ante la consolidación del autoritarismo y la persecución en su contra por parte del gobierno militar, se alineó en la oposición. Su estrategia política fue mantener frente al régimen una "independencia crítica y activa". Esta actitud fue rechazada por el gobierno militar y atacada duramente por la prensa de derecha como ambigua. Finalmente en marzo de 1977 (Decreto Ley 1.697) el PDC fue disuelto, sus bienes fueron confiscados, sus medios de comunicación silenciados y algunos de sus dirigentes relegados y después exiliados.

El sector que pudo oponer más resistencia al autoritarismo fue la Iglesia Católica, que encabezada por el cardenal Raúl Silva Henríquez, opuso a la violencia imperante un mensaje y una práctica de reconciliación. En octubre de 1973 auspició la creación del Comité Pro Paz, que reunía altos dignatarios de varias iglesias y que se dedicó a otorgar defensa a los perseguidos políticos y trabajadores despedidos. En noviembre de 1975, el general Pinochet solicitó perentoriamente la disolución del Comité. El cardenal Silva consintió en su término; pero decidió crear otra institución: la Vicaría de la Solidaridad. La Vicaría se transformó en el refugio y defensa de los perseguidos políticos y la única institución que se atrevió a enfrentar a la DINA y abogar contra la violación de los derechos humanos.

Cuando se creyó que la situación estaba consolidada, el gobierno llevó adelante el primero de varios intentos de fijar un calendario de institucionalización de su proyecto definitivo semi autoritario y neoliberal. El 9 de julio de 1977, en una ceremonia realizada en el cerro Chacarillas, Pinochet fijó metas y plazos para una futura transición a la democracia bajo conducción militar. Los anuncios consolidaban institucionalmente el modelo, el que -sin embargo- incorporaba características políticas al menos semi democráticas. Representaba un triunfo, dentro del gobierno, del sector "Gremialista" y una derrota del sector opuesto a todo intento de retorno a

una administración civil y una apertura política.

LA COYUNTURA DE 1978

El panorama parecía aclararse para el gobierno de Pinochet. Pero durante 1978 una serie de nubarrones oscurecerían este horizonte y alterarían ese calendario. El asesinato de Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976 en Washington, provocó profundos efectos.

El gobierno de Estados Unidos no toleró un acto de esta naturaleza. Tras prolijas investigaciones llevadas a cabo por el fiscal Eugene Propper, quien reunió pruebas incontrovertibles de que el crimen había sido llevado a cabo por la DINA, se pidió la extradición de los responsables materiales e intelectuales, incluyendo a Contreras y al sub director de la institución, el entonces coronel Pedro Espinoza. Ante la gravedad de la situación, que despertó rechazo dentro de las propias Fuerzas Armadas, Pinochet se decidió a disolver la DINA y Contreras fue relevado de sus funciones en agosto de 1977, ascendiéndolo sin embargo, poco después, a general. La DINA fue reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI). El gobierno decidió presentar el caso como un eslabón más de una campaña internacional contra el país. En enero de 1978 se llamó a una "consulta nacional" realizada sin registros electorales, para mostrar al mundo que pese a la agresión extranjera el pueblo chileno apoyaba a Pinochet, quien la ganó por un 75 por ciento del total de los votos emitidos según el resultado oficial.

Con todo, el llamado Caso Letelier continuó su curso. Fue así que después de un feroz forcejeo diplomático, el 8 de abril de 1978 el gobierno optó por entregar a EE.UU el asesino material de Letelier, el norteamericano Michael Townley. A los pocos días, el general Contreras pasaba a retiro. Pero el coletazo político mayor de la expulsión de Townley y todo el caso Letelier fue la materialización de una primera limitada apertura política real por parte del gobierno militar. El 11 de Marzo de 1978 se levantaba el estado de sitio, que duraba desde el 11 de septiembre de 1973, aunque continuaba un "estado de excepción" que era sólo levemente menos restrictivo. Pocos días después fue reemplazado a la cabeza del Ministerio del Interior el general Raúl Benavides, por el civil Sergio Fernández, cercano al Gremialismo. Finalmente, para evitar futuras acciones judiciales contra responsables de violaciones a los derechos humanos, el gobierno decidió dictar una ley de amnistía para los delitos cometidos desde septiembre de 1973 hasta la fecha.

En otra perspectiva, la consulta del 4 de enero también había perseguido subsanar graves discrepancias que se habían producido al interior de las Fuerzas Armadas. El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General Gustavo Leigh, estaba descontento con la marcha del gobierno desde hacía varios años. Después de la "consulta", a cuya convocatoria se había opuesto, Leigh, creyéndose fortalecido por la caída de Contreras, persistió en su actitud crítica del rumbo que llevaba la institucionalización. La pugna estuvo al borde de ser resuelta por las armas. Sólo en último momento la FACH, que apoyaba institucionalmente a su Comandante, sin haber conseguido solidaridad entre las demás ramas de las Fuerzas Armadas, decidió no ofrecer resistencia. El 24 de julio de ese año 1978, Leigh y la totalidad del cuerpo de generales, con dos excepciones, pasaron a retiro. Efectivamente, la situación internacional de Chile en ese año de 1978, iba a ser escenario de la segunda y más grave crisis cuasi bélica acaecida en los

años del gobierno militar en Chile. La primera se había presentado con el Perú en 1974. La nueva crisis, desencadenada en los últimos meses del año 1978 y ahora con Argentina, consecuencia de la interpretación de un fallo en materia de fronteras, fue más grave. Se estuvo al borde de un conflicto armado mayor. La guerra se evitó por la presión norteamericana y la acción mediadora del Vaticano. Se ha dicho, con justicia, que el gobierno chileno manejó bien esta crisis, aunque se debe tener en cuenta que toda la situación posiblemente no se habría producido de no haber existido gobiernos militares a uno y otro lado de los Andes.

BOOM ECONOMICO

Sin embargo, al comenzar el segundo semestre de 1978 y pese a la tensión con Argentina, la serie de tormentas parecía superada y la situación de nuevo estable. Tras el apoyo recibido en la "consulta", desprendido de Leigh y Contreras, con ley de amnistía y firme de nuevo en el poder con el apoyo fiel de la derecha, Pinochet se decidió a actualizar el calendario de institucionalización anunciado en el cerro Chacarillas.

El desprestigio y destitución de Contreras había significado otra considerable pérdida de poder del sector más autoritario y antidemocrático (los "duros") entre los partidarios y colaboradores cercanos de la dictadura militar. En cambio, en la alianza Gremialista-Chicago Boys, a cargo no sólo de la economía sino también del equipo político de gobierno, se había ido abriendo paso la idea (sostenida por Milton Friedman) de que un acentuado liberalismo económico requería como correlato al menos un cierto grado de liberalismo político. El hecho fue que poco a poco se abandonó la idea de perpetuar institucionalmente como gobierno una forma regulada de autoritarismo; se pensaba ahora en una "democracia protegida" a materializarse después de un largo período de despolitización de la sociedad chilena. La diferencia entre ambas concepciones de gobierno, que en un comienzo fue de matices, se fue ampliando. Se contemplaba, en cualquier caso, un plazo de transición largo, el que no sólo tendría un función pedagógica en lo político, sino que se consideraba necesario además para asentar en la conciencia de los chilenos el modelo económico neo liberal - que comenzaba a dar resultado pero cuya consolidación tomaría algunos años- sin peligro de ser dislocado por la protesta social.

De todos modos, era necesario apresurar la concreción de un itinerario de avance hacia la consolidación del neoliberalismo económico y una institucionalidad política que consagrara la democracia protegida. En relación a lo primero, en el mensaje anual a la nación de ese año 1978, Pinochet anunció nuevos importantes pasos a dar en el programa económico social del gobierno que resumió en "siete modernizaciones" claves, todas en consonancia con el proyecto neoliberal. Estas se llevarían a cabo los años siguientes. Un nuevo Código del Trabajo (Plan Laboral) fue dictado; una reforma que entregaba el sistema previsional a empresas privadas (AFP) también comenzó a ser estudiada, aunque se implementaría después de 1980; lo mismo ocurrió -parcialmente- con la salud pública (isapres); se decretó la libertad de tarifas profesionales; los controles sobre la producción de cepas vitivinícolas fueron levantados; más importante aún, una nueva legislación sobre concesiones mineras, que daba amplias garantías al capital extranjero, fue creada y una reducción generalizada del rol del estado en la política social se llevó adelante. Se trabajó además en desburocratizar el estado y agilizar la administración de justicia. En fin, por consejo del

profesor Arnold Harberger, se eliminaron las trabas al crecimiento urbano y se dictó un estatuto automotor que permitió importar piezas y vehículos usados. Después se implementaría la libertad de recorridos y tarifas de la locomoción colectiva particular, en tanto se reducía la inversión pública en infraestructura.

La Corporación de Fomento, (CORFO) tradicional e importante institución estatal creada en la década de 1930 y destinada a promover el desarrollo industrial, se lanzó en otra nueva campaña de ventas de empresas estatales a precios de subasta. Era la segunda ola neoliberal y la implantación en profundidad del modelo.

En relación a la consolidación institucional, en tanto, se decidió preparar una Constitución que consagrara la "democracia protegida". Una comisión encabezada por Enrique Ortúzar venía trabajando al respecto. Bajo el empuje de los Gremialistas y del ministro del Interior Sergio Fernández, se aceleró la redacción de un borrador constitucional.

Conocido un primer borrador constitucional restaba saber cuál sería su mecanismo de legitimación. Sobre este punto, el general Pinochet propuso el siguiente procedimiento: el proyecto constitucional de la Comisión Ortúzar pasaría por el Consejo de Estado. Cumplida esa etapa, el texto resultante sería plebiscitado. Promulgada la nueva constitución se entraría en una "transición" de seis años, con un parlamento designado por el gobierno. Las primeras elecciones políticas tendrían lugar no antes de 1985. No se establecían plazos para ese itinerario. Sin embargo, el Consejo de Estado, a instancias del ex-presidente Jorge Alessandri, introdujo modificaciones al texto de la comisión Ortúzar, las cuales no concordaban con el punto de vista del Jefe del Estado.

En esas circunstancias, otro grupo de juristas, bajo la dirección del Ministro del Interior Sergio Fernández, fue llamado para que intentara una nueva versión del texto constitucional. Pinochet gobernaría -sin parlamento y con facultades dictatoriales- hasta 1989. En 1988 un plebiscito decidiría si Pinochet (u otro candidato del gobierno) continuaría como Presidente, ahora con un parlamento elegido parcialmente, hasta el año 1997. Sólo entonces se realizaría la primera elección presidencial competitiva. En caso de perder el candidato gubernamental el plebiscito de 1988 habría elecciones abiertas y competitivas en 1989, que fue en definitiva lo que ocurrió.

Los economistas de gobierno anunciaban un próximo boom que presumían aseguraría su triunfo en el plebiscito que había de llamarse en 1980 para la aprobación del texto constitucional y los artículos que regulaban la transición.

La Constitución de 1980, en su versión original, consagraba una institucionalidad que en su estructura definitiva (a regir después de 1989 ó 1997 dependiendo del resultado del plebiscito de 1988) se acercaba a ser democrática en muchas de sus instituciones, pero al mismo tiempo se desvinculaba a esta forma de gobierno en lo que verdaderamente era su esencia: la libertad de optar y transar entre grupos diversos. Los mecanismos e instituciones claves que consagraba estaban destinados a que el verdadero poder político siguiera en manos de las Fuerzas Armadas y los sectores más conservadores de la vida nacional, impidiendo el acceso al poder de grupos que amenazarán sus intereses; en particular al crear un Senado "designado" en proporción muy amplia, un Consejo de Seguridad

Nacional con mayoría militar y consagrar la imposibilidad del Presidente de la República de remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. También hacía casi imposible todo cambio de su texto.

UNA OPOSICION RENOVADA

Pero ¿que había sucedido con la oposición durante todos estos años y sucesos? ¿Cómo sobrevivieron estos sectores entre los años 1974 y 1980?. Veamos primero la suerte de los partidos y grupos políticos que habían pertenecido a la Unidad Popular o le eran afines.

La mayoría de los dirigentes del Partido Socialista que no habían caído presos o habían muerto en los primeros días lograron pasar al exilio (entre ellos su secretario general Carlos Altamirano). Unos cuantos lograron permanecer ocultos dentro de Chile. En ambos sectores, después de los primeros meses (o años) de shock traumático y cuando los jefes tomados prisioneros en los primeros días fueron siendo liberados y exilados, se reanudó la lucha sorda entre facciones que había caracterizado su accionar durante la época del gobierno de Allende. Se reflexionaba sobre las causas de la "derrota" y al hacerlo se entraba en un espiral de recriminaciones mutuas y rupturas en cadena que alcanzó niveles agudos.

El exilio provocó que la cúpula dirigente socialista se dividiera en el hecho. El grupo que permaneció dentro de Chile ("Secretariado Interior"), logró publicar en marzo de 1974 un documento ("Documento de Marzo"). El enfoque marxista leninista se mantenía.

Pero el "Secretariado Interior" no tenía fuerza real. Más importante era el accionar del PS en el exterior ("Secretariado Exterior"). Este, bajo la dirección de Carlos Altamirano, se radicó en Berlín y realizó los llamados plenos de la Habana en 1975 y el de Argel (el que en realidad se llevó a efecto en Berlín), en 1978. En este último Altamirano realizó un profundo viraje sobre los que habían sido sus postulados durante la época de la UP y posiblemente hasta cerca de 1977 a juzgar por las opiniones que da en su libro "Dialéctica de una derrota", aparecido en México en ese año. La democracia liberal estaba siendo revaluada, más adelante pasaría algo relativamente similar con la propiedad privada y un liberalismo económico moderado. Ahora Altamirano -que había vivido la desilucionante experiencia en Alemania del Este de contemplar de cerca un "socialismo real"- sostenía que: "Los elementos de formalismo que caracterizan a la limitada democracia burguesa, no invalidan el concepto mismo de democracia". Viniendo de quien venían, esas palabras constituían un cambio gigantesco; se trataba de un lenguaje "de renovación". Planteaba también la necesidad de una convergencia con el Partido Demócrata Cristiano.

El problema de fondo que quedaba planteado a raíz del viraje de Altamirano y los socialistas externos era el de la existencia misma de la Unidad Popular. Todo cambiaba con la nueva lectura ideológico-política del Pleno de Argel. Pero la Dirección Interior no estaba dispuesta a ir tan lejos. La apoyaba además, desde el exterior, quien se perfilaba ya desde 1974, como el gran rival de Altamirano, Clodomiro Almeyda, una figura grata a los comunistas. Estos, por su parte, buscaban constituirse en la fuerza principal dentro de la Unidad Popular.

El hecho es que en su congreso de 1979 la "Sección Interna", descontenta con el nuevo rumbo del Secretariado Exterior después del pleno de Argel, reemplazó como secretario general del partido a Carlos Altamirano. Este respondió con otro congreso, reunido ahora en París (conocido entre los socialistas de hoy como el XXIV Congreso) el que desconoció los acuerdos del congreso interno de 1979, acusando a su vez a Almeyda de intentar "imponer una ortodoxia presuntamente marxista-leninista trasnochada y anti histórica, contraria a la actual tendencia del movimiento revolucionario mundial, por su carácter antidemocrático". Entonces Altamirano fue expulsado por el "Secretariado Interno". Las posiciones se habían invertido, los radicalizados eran ahora los "internos" y los moderados los "externos". Pero, desde nuestro punto de vista, lo que nos interesa es destacar que el proyecto histórico que caracterizó a la Unidad Popular se desintegró. Y que este cambio, después de 1988, tendría consecuencias para la historia de Chile casi tan importantes como la consolidación del proyecto económico social del régimen militar y la derecha. Las nuevas circunstancias harían posible la alianza política del Partido Socialista con la Democracia Cristiana, el triunfo presidencial de la Concertación en 1989 y el retorno de Chile a la democracia política.

El hecho es que en 1979 ya no había UP. Existía un PS renovado dirigido todavía por Altamirano y otro, cercano al Partido Comunista, con mayor militancia dentro de Chile.

La historia de la evolución del Partido Comunista durante estos años es bastante más sencilla. Con un Moscú todavía como centro rector del Comunismo mundial, su proyecto histórico continuó siendo el marxismo leninismo de tipo soviético.

Para el PC, la principal causa del fracaso de la UP fue la no obtención del poder total debido a la acción del imperialismo y lo que su Secretario General, Luis Corvalán llamó "dos tipos de errores: unos de derecha y otros de izquierda, que en buena medida se entrelazaban". Vale decir, no haber sido más duros con la contra revolución y, al mismo tiempo, contra el infantilismo de izquierda (MIR y el PS dirigido por el Altamirano de la época). Pese a la represión inicial, el Partido Comunista logró mantener una estructura unitaria.

Sobre la base de la caracterización del régimen de Pinochet como fascista, el PC mantuvo hasta 1979 una estrategia (remontable hasta el VII Congreso de la Komintern de 1935) destinada a constituir una alianza táctica con "todas las fuerzas sociales antifascistas, incluyendo religiosos, comerciantes, industriales no fascistas, las propias Fuerzas Armadas y desde luego los partidos de clase media". Su trabajo había de ser fundamentalmente de concientización, oponiéndose a cualquier acción armada, la que se pensaba que sólo serviría para consolidar al bloque militar-derechista gobernante. Pero después del quiebre de Partido Socialista y su parcial "renovación", durante los años 1979-1980, el PC cambió de táctica. En las nuevas circunstancias, la anterior parecía inviable. Por otra parte, sectores importantes de su militancia juvenil, como protesta por lo que consideraban una postura blanda del Partido Comunista hacia la dictadura, habían estado emigrando hacia lo que quedaba del MIR, que intentaba renacer por esos años. Además, la aprobación de la Constitución de 1980, que

significaba la voluntad de Pinochet de permanecer en el poder por mucho tiempo más, obligaba a repensar la táctica sostenida hasta entonces. El 4 de septiembre de 1980 Luis Corvalán, en un discurso pronunciado en Moscú, diseñó una nueva estrategia. Ahora se optaba por la oposición armada a la dictadura, llevándolo posteriormente a la formación del "Frente Patriótico Manuel Rodríguez".

De esta manera, 1980 se transformó en un año clave en la evolución de la izquierda marxista chilena. Un sector socialista (dirigido por quien era tradicionalmente el líder más radical: Carlos Altamirano) tuvo una renovación socialdemócrata. Otro sector se alineó con un Partido Comunista que estaba dispuesto a entrar a luchar contra el régimen militar por la vía armada.

Las nuevas circunstancias significaban, repitámoslo, la desaparición de la Unidad Popular y con ella de uno de los tres proyectos históricos que se habían disputado la conducción de la historia de Chile desde 1958. La Democracia Cristiana, en clara oposición al régimen militar desde fines de 1974, guardó un perfil bajo y hasta la "consulta" de 1978 pareció conservar la esperanza de una salida pactada y pacífica, en un plazo breve. La "consulta" y los sucesos de 1978 la desengañaron. Parecía muy debilitada: un aparato partidista semi tolerado por el régimen, apoyado por algunos grupos de estudio, que sobrevivía precariamente. La figura y prestigio del ex Presidente Eduardo Frei era su principal capital político, el que le permitía mantener el apoyo de un segmento significativo de la opinión pública de oposición.

La Democracia Cristiana conservaba su unidad. Habían sectores que divergían dentro de la DC, pero nada parecido al panorama de desintegración del PS y los demás partidos de la ex Unidad Popular, excluyendo (relativamente) al Comunista. De hecho, uno de los grandes fracasos políticos del gobierno militar y en particular del Gremialismo fue el no lograr arrebatarse, de modo definitivo, su base de clase media a la Democracia Cristiana.

Movimiento sindical contrario al régimen, o simplemente independiente, no existió prácticamente durante estos primeros años de gobierno castrense, excepto en el caso de algunos sindicatos de la gran minería del cobre. Las directivas estudiantiles, en tanto, eran nominadas por las rectorías de las diversas universidades intervenidas y eran incondicionales al régimen militar. Grupos aislados fueron creando sin embargo una cultura juvenil de rechazo a la realidad existente.

NEOLIBERALISMO ECONOMICO

En el mes de agosto de 1980 Pinochet llamó a plebiscitar el texto constitucional redactado por la comisión Fernández en el plazo de un mes. Con derecho, por primera vez desde 1973, a expresar públicamente su pensamiento y disponiendo de un limitado acceso a la prensa, la oposición política fue sorprendida en desconcierto, aun cuando, por iniciativa principalmente demócratacristiana, ya estaba funcionando una comisión constitucional paralela a la oficial, el llamado "Grupo de los 24", constituido en julio de 1978.

A pesar de la disparidad de medios y de lo limitada que fuera la sorpresiva apertura política, la campaña por el plebiscito fue reñida y apasionada. La oposición, en el dilema de participar en éste, legitimándolo, o negarse a hacerlo, entregándole una victoria aplastante y sin oposición a Pinochet, optó por la primera posibilidad.

Triunfó el "Sí" por un 67,04 por ciento contra un 30,19 por ciento de los votos, más blancos y nulos. La votación se hizo nuevamente sin registros electorales. Pero al igual que en la consulta de 1978, según la opinión de los analistas, sin duda la opción por el "Sí" realmente recibió una mayoría de preferencias, aunque fuese probablemente en un porcentaje menor que el anunciado por el Ministerio del Interior.

Poco después del plebiscito el Presidente de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar, fue exiliado. Al año siguiente, en enero de 1982, moría Eduardo Frei con lo cual el principal partido de oposición quedaba golpeado tan duramente, que muchos creían en la imposibilidad de su recuperación. Sin embargo, hacia fines de ese mismo año se imponía dentro del PDC, con Gabriel Valdés a la cabeza, la corriente que propiciaba un franco acercamiento con la izquierda renovada, abriéndose una estrategia que finalmente llevaría hacia el retorno de la democracia en Chile en lo que Valdés llamó "un gran movimiento nacional" de recuperación democrática. Se creaba además, en noviembre de 1982, el Proyecto de Desarrollo para un Consenso Nacional (Proden), que reunía figuras de diferentes orígenes políticos actuando en forma independiente, inclusive varios personeros de derecha. En cierta medida, todas estas iniciativas fueron consecuencia del renacimiento de la actividad política que se produjo transitoriamente con motivo del plebiscito de 1980.

Entretanto la consolidación post plebiscito del régimen de Pinochet, celebrada con el retorno del gobierno al tradicional palacio de los presidentes de Chile "La Moneda", destruido en el golpe del 11 de septiembre de 1973 y ahora reconstruido, sería efímera. La economía chilena, que aparentemente pasaba por su mejor hora, vino a experimentar súbitos y graves problemas a fines de 1981 los que se transformaron en debacle el año siguiente.

Una serie de errores macroeconómicos del equipo de gobierno, al perpetuar la mantención artificial de un precio bajo del dólar, sumados a la recesión mundial que se produjo ese año, llevó a una cadena de quiebras que comenzaron por algunas de las industrias más grandes del país y culminaron con las de algunos de los mayores bancos particulares. El pasivo de todo el sistema bancario, descontando capital y reservas, superaba los seis mil millones de dólares de la época. La cesantía se disparó hasta más de un 20 por ciento nominal y un porcentaje real bastante más alto (quizás hasta un 30 por ciento). El PIB que había venido subiendo desde 1976 cayó en un 14,1 por ciento en 1982 y otro 0,7 por ciento en 1983. El estado tuvo que socorrer con miles de millones de dólares al aparato financiero en quiebra. Era el fin del boom y naturalmente esto tendría sus consecuencias políticas.

LA PRIMERA PROTESTA

Pero la magnitud de la crisis y sus efectos sociales provocaron que los trabajadores del cobre llamaran a un paro y "protesta" contra el gobierno. Se

trataba de una acción originalmente muy limitada, pero sus efectos fueron sorprendentes, no sólo protestaron los mineros en una acción que duró sólo un día (11 de mayo de 1983), sino que se acoplaron espontáneamente sectores amplios de la sociedad civil.

En el mismo país que en 1980 había entregado un aparente amplísimo apoyo a Pinochet, la ola de "protestas" cundió incontenible. Estas "protestas" periódicas abarcaron un período de más de dos años. Las primeras se dieron sólo en Santiago, pero después se extendieron por todo el país.

La sociedad civil y el mundo político se reactivaron a través de las "protestas" iniciadas en 1983. Aunque convocadas por sindicatos y después organizaciones políticas y civiles, fueron, en lo esencial, reacciones sociales espontáneas, aunque ciertamente estaban relacionadas con la debacle económica de 1982. También fue importante el hecho de que la crisis permitió el renacimiento de un auténtico movimiento estudiantil. Surgieron federaciones de alumnos universitarios y secundarios en abierta rebeldía ante el régimen.

El colapso económico de 1982 no sólo fue fundamental en el nacimiento de las "protestas", favoreció asimismo la nueva estrategia subversiva del Partido Comunista ("Frente Patriótico Manuel Rodríguez"), el renacido MIR y el "MAPU Lautaro". Estos, en lo que tenían propiamente de lucha guerrillera, nunca llegaron a representar un peligro para la solidez del régimen militar; pero realizaron una serie de acciones espectaculares que culminarían en el intento de asesinato de Pinochet en 1986 y una internación masiva de armas en la playa de Carrizal Bajo, a unos 700 kilómetros al norte de Santiago.

La nueva situación significó también la pérdida de protagonismo de la Iglesia Católica como defensora de los derechos humanos. Ahora desempeñaría otro rol, el de mediadora entre el gobierno y una oposición que parecía consolidarse. Esto se explica por el cambio en las condiciones objetivas y, en menor medida, porque buscando la reconciliación nacional, al llegar la edad de jubilación del Cardenal Raúl Silva Henríquez, el Vaticano decidió nombrar como Arzobispo de Santiago, el puesto de más representatividad del clero chileno, a un hombre de acuerdos. El futuro Cardenal Juan Francisco Fresno.

La tardía respuesta política del gobierno militar ante las protestas, que en 1983 parecían incontenibles, fue nombrar en el Ministerio del Interior a Sergio Onofre Jarpa. Su tarea era negociar con la oposición "democrática". Con Jarpa la antigua clase política volvía al Palacio de la Moneda. Naturalmente el nombramiento de Jarpa como Ministro del Interior, aunque abría una esperanza, no significaba la solución inmediata para el problema de las "protestas" y una posible apertura democrática. Además, estaba por verse cuanto podía influir Jarpa en la voluntad de Pinochet.

En tanto, la oposición formal, los partidos políticos, lanzaron la estrategia de la "movilización social". No cabía otra actitud que encauzar la situación; las "protestas" deberían culminar en un desplome del régimen. También comenzaron los esfuerzos de los partidos de oposición por unirse. La clave era conseguir un acuerdo formal entre el Partido Socialista "renovado" y la Democracia Cristiana. A este acuerdo se esperaba que se

integraran los demás partidos de la ex UP, excepto el Comunista. Entonces se podría entrar a negociar con el gobierno militar y saber a que atenerse. Ya en febrero de 1983 se habían reunido una serie de personalidades de los partidos Radical, Demócrata Cristiano, Socialista, e incluso algunos antiguos conservadores y liberales, redactando un "Manifiesto Democrático". Un llamado "que serviría de germen" a los posteriores acuerdos que se lograrían los años siguientes entre los sectores políticos democráticos chilenos. Finalmente los partidos de la oposición constituyeron la Alianza Democrática (AD) y "pidieron la renuncia de Pinochet, la elección de una asamblea constituyente y un pacto social amplio que supervigilara el retorno a la democracia". Se trataba de una ingenuidad; el régimen sabía de sobra que tenía todavía suficientes recursos para mantenerse en el poder, aunque se fuese pagando progresivamente un precio político más alto. La Alianza Democrática no fue el único conglomerado político formado ese año de 1983. El Partido Comunista y la fracción Almeydista del socialismo hicieron su propio pacto; formaron el Movimiento Democrático Popular (MDP) que estaba por una política de movilización de masas y confrontación, en la cual la punta de lanza había de ser el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El PC, para contrariedad de la Alianza Democrática, se negó explícitamente a renunciar al uso de la violencia en contra del régimen militar durante la etapa de negociación que parecía aproximarse.

NUEVA RECUPERACIÓN

Sin embargo, al comenzar el año 1985, las "protestas", que continuaban realizándose periódicamente, comenzaron a ser reprimidas más duramente. El gobierno había declarado el estado de sitio nuevamente en noviembre de 1984 y Jarpa fue reemplazado, quedando como verdadero artífice de la política oficial el Secretario General de Gobierno, el joven abogado Francisco Javier Cuadra. Por otra parte, cada vez parecía más claro que, de no poder darse otro paso adelante en la resistencia civil, las "protestas" estaban agotando sus posibilidades en cuanto instrumento para debilitar y eventualmente acabar con el régimen. Peor todavía, entre los sectores medios y con ayuda de la propaganda gubernativa, hacían resurgir el fantasma de la anarquía de 1973.

Lo que logró todo este episodio (1983-85) de desafío a la autoridad de Pinochet fue, en lo concreto, que se autorizara un pequeño espacio de libertad de prensa y el retorno de una cantidad, también pequeña, pero creciente, de exiliados. Pero lograron asimismo mostrar definitivamente a la derecha que el autoritarismo no podía ser una solución de carácter permanente. Si más adelante el plebiscito de 1988 se llevó adelante en forma correcta y se respetó su resultado, fue en buena medida consecuencia de las protestas de 1983-85 que pusieron en evidencia que el régimen no podía seguir prescindiendo absolutamente de la voluntad popular. Aprovechando el nuevo ánimo creado a raíz de las protestas, el cardenal Fresno y sus consejeros vieron la posibilidad de incorporar a la Alianza Democrática sectores que habiendo estado con el régimen fuesen partidarios de su apertura política en términos más amplios que los consagrados en la Constitución de 1980. El cardenal Fresno solicitó a tres personas que redactaran un proyecto de Acuerdo Nacional de Transición a la Democracia: Fernando Leniz, empresario y uno de los primeros ministros de Economía de Pinochet; José Zavala, presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos; y Sergio Molina, ex ministro del gobierno de Frei. Era una forma de crear o, mejor dicho fortalecer, una derecha democrática a partir del

Movimiento de Unión Nacional (MUN) que algunos conservadores relevantes habían creado durante el crucial año de 1983; entre ellos el ex senador conservador Francisco Bulnes y el futuro presidente del Partido Renovación Nacional después de 1992, el entonces muy joven Andrés Allamand.

¿Qué movió a esos hombres de derecha que habían colaborado abiertamente con el gobierno militar a sumarse al "Acuerdo"?, posiblemente la evidencia de que sumido el país en la crisis económica sería difícil para el régimen cumplir con su itinerario de 16 años a partir de 1981 y que el cambio hacia la democracia vendría en 1989 y no en 1997. De allí la necesidad de buscar una "solución pactada" al estilo español. En algunos de ellos también pesó, sin duda, la evidencia que la democracia protegida o autoritaria no era ya necesaria ante la nueva fisonomía de la oposición socialista. En las nuevas circunstancias la institucionalidad política autoritaria podía ser transada a cambio de la continuidad de la economía neoliberal.

Tras difíciles negociaciones, de las cuales sólo se excluyó al MDP que no estaba dispuesto a renunciar a la vía armada, el "Acuerdo Nacional" se firmó en agosto de 1985. La clave de su concreción -insistimos- fueron las seguridades que los demócratacristianos y algunos socialistas dieron a los empresarios y políticos de derecha, de que el tránsito hacia la democracia que se proponía no pretendía una revolución socialista, ni siquiera se eliminaría el sistema neoliberal como base económica de la sociedad chilena, a pesar de que en el texto se mencionaba una "economía mixta". Esa opción se respetaría luego de la elección del Presidente Patricio Aylwin en 1989. Pero el gobierno militar ignoró el Acuerdo Nacional y parte de la derecha también, en particular la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido político que nació de la estructuración política formal, el año 1984, del "Gremialismo".

Por otra parte, la economía comenzaba a recuperarse bajo la conducción de Hernán Büchi, un economista neoliberal más pragmático que De Castro o Cauas. Büchi, sacando lecciones del problema que tuvieron éstos, logró que, a partir de 1985, los índices macroeconómicos, en especial el de crecimiento del producto nacional, subieran apreciablemente (en promedio cinco por ciento entre 1985 y 1988 inclusivos) y nuevamente pudo hablarse del éxito del "modelo". Esta evolución ha sido calificada como "desde el neo liberalismo radical al neoliberalismo pragmático".

Fue así que hacia comienzos de 1986 el régimen militar había superado la crisis y las nuevas circunstancias fortalecieron en éste la confianza en ganar el plebiscito de 1988.

EL PLEBISCITO DEL 88

Sin embargo, repuesta parcialmente de los golpes que significaron el fin de las protestas, del aprovechamiento publicitario gubernativo del frustrado atentado contra Pinochet y del episodio de las armas de Carrizal, en la evidencia que el itinerario de la Constitución de 1980 finalmente se cumpliría; el presidente del PDC, Gabriel Valdés, decidió iniciar los contactos para organizar (con sus aliados de la Alianza Democrática y el Acuerdo Nacional) una coalición de gobierno con miras a ganar el plebiscito de 1988 y las elecciones presidenciales del año siguiente.

Con todo, la oposición no estaba todavía decidida a participar en el plebiscito a ser llamado en 1988, posiblemente temiendo una situación

como las de los años 1978 y 1980. Finalmente, la Democracia Cristiana tomó la decisión de participar en el plebiscito en las condiciones en que estaba planteado y en el convencimiento de que la oposición podía ganarlo en caso de ser correcto; se trataba de una apuesta muy arriesgada. Decisión que se tornó firme cuando en agosto de ese mismo año 1987, Patricio Aylwin, portavoz de la tesis por la participación en el plebiscito de 1988, fue elegido Presidente del Partido Demócrata Cristiano procediéndose a la inscripción legal del partido en el Registro Electoral. Así gobierno y oposición fueron al plebiscito en el convencimiento de que lo ganarían.

La izquierda renovada tomó la misma actitud, en un postrer rechazo a la estrategia militar del Partido Comunista, el que sin claudicar ante el fracaso de Carrizal, insistía en negarse al camino electoral "dentro" de la institucionalidad. La mayoría de los grupos menores de izquierda procedieron también, en los meses siguientes, a apoyar la inscripción, formándose el 2 de febrero de 1988 la "Concertación por el No" conglomerado que reunía a 16 partidos o grupos políticos. El esquema de los tres tercios se había quebrado, aunque mediante el mecanismo de alianza de dos de ellos, algo que ya había sucedido en la elección de Eduardo Frei Montalva en 1964 y de nuevo durante el gobierno de la Unidad Popular entre 1970-73, cuando se habían aliado el centro y la derecha, aunque de manera transitoria. Ahora lo harían el centro y la mayor parte de la izquierda y con carácter duradero.

La Concertación llamó a toda la oposición a inscribirse en los registros electorales. El nacimiento, en torno a la figura del socialista Ricardo Lagos, de un partido político "instrumental" (que luego se convertiría en permanente) el Partido Por la Democracia (PPD), al cual se integraron incluso figuras de derecha, consolidó la opción de participar en el plebiscito de 1988 ya tomada por el PDC y el PS renovado. Finalmente, también en febrero del año 1988, el propio MDP (excepción hecha del Partido Comunista) también se avino a participar en el plebiscito.

Ante el desafío, Pinochet hizo retornar a Sergio Fernández al Ministerio del Interior. El hombre del plebiscito de 1980 era colocado nuevamente en calidad de estrategia para ganar éste. Pero las circunstancias eran muy diferentes; el Chile de 1980 estaba en pleno boom económico y el recuerdo de la anarquía de 1972-73 estaba aún fresco. No habían ocurrido el desplome de la economía de 1982, ni las protestas, y la opinión pública tenía mucho menos conocimiento de las violaciones masivas a los derechos humanos ocurridas durante los primeros años de la dictadura. Ahora existía además una pequeña derecha democrática y una limitada prensa de oposición.

En agosto de 1988, los comandantes de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, vale decir el poder legislativo, eligieron al general Pinochet como candidato a la Presidencia de la República para el plebiscito a realizarse. Frente a su nombre la ciudadanía debía pronunciarse por el "Si" o por el "No". Se levantaron los estados de excepción.

El plebiscito del 5 de octubre de 1988 se llevó a cabo correctamente. Incluso la oposición tuvo un limitado pero decisivo acceso a la televisión durante las semanas previas. El recuento de los votos, hecho sobre la base de registros electorales correctos, fue limpio.

Finalmente, después de varias horas se dio a conocer el resultado. El "No" había triunfado por un 54,71% de los votos sobre un 43,01, por el "Sí", con una participación ciudadana altísima, un 92 por ciento de los inscritos. Habría elecciones competitivas y libres en 1989.

**Cristián Gazmuri es profesor del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile*

***Artículo publicado en el diario [La Tercera](#) el 12/09/1999*



Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios "Miguel Enríquez", CEME:
<http://www.archivo-chile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a:
archivochileceme@yahoo.com

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores.

© CEME web productions 2005

